

Mano izquierda para un trasvase

Quince meses han pasado desde que el secretario general del PSPV, Joan Ignasi Pla, enviara a Alicante a la plana mayor de los responsables de la política hídrica del partido -entre ellos dos altos cargos públicos de los ministerios de Medio Ambiente y Agricultura- para tratar de explicar las razones por las que allá por el mes de julio de 2005, la empresa estatal Aguas del Júcar decidiera suspender las obras del proyecto original del trasvase Júcar-Vinalopó para trasladar la toma del agua a Cullera. Quince meses después, con el nuevo trazado a las puertas de iniciarse, con la UE en el bolsillo y a punto de anunciar oficialmente el aumento de la financiación comunitaria, y con el compromiso del Gobierno central de invertir 303 millones de euros -50.500 millones de las antiguas pesetas-, la situación continúa bloqueada a pesar de los supuestos «puentes» tendidos por el Gobierno y los anuncios de la Junta Central de Usuarios a sentarse a negociar pero, según sospecha el Ejecutivo, con una bala en la recámara.



Servicios

-  [Enviar esta página](#)
-  [Imprimir esta página](#)
-  [Atención al lector](#)

[Anterior](#)
[Volver](#)
[Siguiete](#)

Quince meses después, el Ministerio de Medio Ambiente y el propio Pla -el mismo que anunció el cambio de proyecto tras una reunión con ?Narbona en Madrid- continúan sin interlocutores que acierten a explicar su política en Alicante porque, a día de hoy, el que, entre otros, estaba llamado a ser el peón conciliador -Juan José Moragues, presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar- continúa desaparecido y, lo que es peor, dejando todo el protagonismo mediático a personas cuya relación con el presidente de los usuarios del futuro trasvase parece irreconciliable.

En la partida de ajedrez en la que se ha convertido en los últimos meses la ejecución del trasvase Júcar-Vinalopó hay de todo menos mano izquierda política y el Ministerio de Medio Ambiente se encuentra ahora con que su esfuerzo por hacer el trasvase no sólo no le renta beneficios incluso merecidos, sino que se le viene de nuevo en contra porque, pese al tanto jurídico que supone el que la Confederación Hidrográfica del Júcar se haya convertido en el usuario final de las aguas del Azud de la Marquesa, la Administración central sólo cuenta en estos momentos con el respaldo de unos cuantos ayuntamientos del mismo signo político.

A estas alturas quizá ya nadie pueda poner en duda que el agua de Cullera no sirva para regar -estudios técnicos hay para todos los gustos- pero tampoco nadie puede negar que el proyecto del trasvase Júcar-Vinalopó ha cambiado por completo. Una cuestión que tiene consecuencias para los futuros receptores del agua, sobre todo económicas, que, sin embargo, continúan sin recibir información dado que las relaciones entre los representantes de unos y otros no existen.

Resulta loable que el Ministerio de Medio Ambiente se haya rascado el bolsillo para llegar hasta los 303 millones de euros de inversión y hacer un trasvase -bien es sabido que contra la propia opinión de la ministra Cristina Narbona y sus asesores (leáse Nueva Cultura del Agua y grupos ecologistas)- pero ni por esas puede convencer a unos usuarios que el viernes tendieron la mano de forma oficial y casi se la cortan.

Quince meses después de la suspensión del anterior trazado y a semanas de que

comiencen las obras del nuevo, resulta urgente y necesario que ambas partes se sienten y negocien. Los usuarios están dispuestos a ceder e incluso a aceptar la toma del agua en Cullera pero necesitan también alguna concesión y, sobre todo, que alguien del Gobierno les escuche al margen de las reuniones, intoxicaciones, engaños y presiones fuera de guión de los últimos meses.

Llega la hora de la política sin revanchismos. El presidente de la Junta Central, Andrés Martínez, al que acusan de haberse plegado al PP en su oposición al trasvase desde la Marquesa -quizá algunos de los acusadores tengan razón pero también le han empujado a ello- ha confirmado oficialmente que su anhelo no van por la Alcaldía de Villena sino por acabar con lo que empezó, la ejecución de un trasvase de aguas desde Valencia que Alicante reclama desde hace 400 años. Medio Ambiente debe tender la mano que ofreció y no despreciar un diálogo que, al margen de los votos, es obligado para con una provincia en la que la garantía hídrica es fundamental y, que nadie lo olvide, genera y da a las arcas del Estado mucho más de lo que tradicionalmente e, independientemente de quien gobierne en Madrid, recibe.

Nadie puede pensar que el Ejecutivo central pueda haberse metido en la ejecución de una obra pública que no sirva para nada. Si en 2009, una vez hecha la canalización, la situación es la misma que en el presente diciembre, alguien tendría que pagar la inoperancia. En el escenario actual un trasvase de agua que cuesta 303 millones de euros para baldear calles o regar cuatro jardines es un lujo que nadie puede permitirse y, mucho menos con dinero público. Si esto no se arregla a más de uno le le tendría que pasar factura política y... Unos y otros deben ceder porque el reloj corre ya en contra de la provincia.o